



Asamblea General

Distr.
GENERAL

A/47/748
2 de diciembre de 1992
ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

Cuadragésimo séptimo período de sesiones
Temas 10 y 149 del programa

MEMORIA DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE LA LABOR DE LA ORGANIZACION

SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN ESTONIA Y LETONIA

Carta de fecha 1° de diciembre de 1992 dirigida al
Secretario General por el Representante Permanente
de Letonia ante las Naciones Unidas

Tengo el honor de referirme a la carta que con fecha 26 de septiembre de 1992 le dirigió el Presidente del Consejo Supremo de Letonia, Sr. Anatolijs Gorbunovs (A/47/476, anexo). En su carta, el Sr. Gorbunovs le pedía "que utilizara sus buenos oficios ante el Secretario General Adjunto de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos con objeto de acelerar el envío a Letonia de una misión verificadora de hechos integrada por expertos de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos", con objeto de investigar presuntos abusos de los derechos humanos en Letonia.

Deseo expresarle mi sincera gratitud por la celeridad con que atendió la invitación del Sr. Gorbunovs, posibilitando así el envío de una misión verificadora de hechos a Letonia del 27 al 30 de octubre de 1992, encabezada por el Director del Centro de Derechos Humanos, Sr. Ibrahim Fall. Deseo agradecerle además que haya remitido a la Misión Permanente de Letonia el "Resumen del informe de una misión verificadora de hechos enviada a Letonia" (véase anexo). Considero que la misión en cuestión es análoga a las que usted previó en su informe titulado "Un Programa de Paz", en particular en la parte del informe que se refiere a la diplomacia preventiva (A/47/277-S/24111).

Le agradecería que tuviera a bien hacer distribuir el texto de la presente carta y su anexo como documento oficial de la Asamblea General, en relación con los temas 10 y 149 del programa.

(Firmado) Aivars BAUMANIS
Representante Permanente de la
República de Letonia ante las
Naciones Unidas

ANEXO

Resumen del informe de una misión verificadora de hechos
enviada a Letonia

1. En atención a una invitación de las autoridades de Letonia, el Secretario General envió a ese país, del 27 al 30 de octubre de 1992, una misión verificadora de hechos encabezada por el Sr. Ibrahim Fall, Director del Centro de Derechos Humanos, con el cometido de investigar presuntas prácticas discriminatorias contra minorías en Letonia.

2. Los integrantes de la misión se reunieron con diversos funcionarios de Letonia, entre ellos el Jefe de Estado, Presidente Anatolijs Gorbunovs, el Vicepresidente, el Primer Ministro, numerosos ministros, presidentes de comisiones parlamentarias, representantes de facciones parlamentarias, el Presidente de la Corte Suprema, miembros del Colegio de Abogados, representantes de diferentes grupos y asociaciones de minorías, incluidos representantes de la minoría rusa, representantes de credos religiosos, abogados, dirigentes sindicales, directores de medios de comunicación letones, el Decano del Cuerpo Diplomático y el Embajador de la Federación de Rusia. En sus reuniones con representantes de las minorías y por las calles de Riga la misión recibió aproximadamente 800 peticiones.

3. La misión examinó y analizó el texto de varias leyes pertinentes, así como decretos gubernamentales y reglamentaciones administrativas referentes a los derechos de las minorías.

Situación actual

4. Como resultado de una política sistemática de traslado de la población que estuvo en vigor durante 50 años de ocupación soviética, de un total aproximado de 2,7 millones de habitantes sólo el 52% de la población de Letonia es hoy en día de origen letón mientras que, en 1935, este grupo representaba el 75,5% de la población total.

5. Hay inquietud entre las minorías nacionales. Sus representantes expresaron su preocupación por la situación jurídica futura y los derechos civiles, políticos y económicos de los grupos étnicos no letones de la población, así como por el actual proyecto de ley sobre ciudadanía, la aplicación de la ley sobre el idioma letón y el proceso de inscripción de los habitantes de Letonia.

a) Ciudadanía

6. Con fecha 15 de octubre de 1991, el Consejo Supremo aprobó una resolución sobre la renovación de los derechos y principios fundamentales de naturalización de los ciudadanos de la República de Letonia, en la que sólo se reconoce como tales a quienes ya tenían esa condición al 17 de junio de 1940 y a sus descendientes. Otros residentes adquirirían la ciudadanía por naturalización, tras la aprobación de un proyecto de ley sobre la materia que actualmente se examina en el Parlamento.

7. Con arreglo al proyecto de ley, algunas categorías de habitantes vinculados estrechamente a las fuerzas del ejército o de la policía y a los servicios de seguridad de la antigua Unión Soviética quedarían permanentemente excluidos de la posibilidad de adquirir la ciudadanía letona por naturalización. Otros residentes permanentes de Letonia podrán adquirir la ciudadanía por naturalización, de acuerdo con cupos anuales que habrá de determinar el Parlamento. Las condiciones básicas para la naturalización son: 16 años de residencia permanente (en el proyecto de ley se estipula como variante 10 años de residencia permanente, en lugar de 16); dominio del idioma letón hablado, que se ha de determinar mediante el examen que proceda; un juramento de lealtad, conocimiento de los principios básicos de la Constitución y renuncia a toda ciudadanía anterior (expatriación).

8. Aunque cabe la posibilidad de que no se atribuya un carácter discriminatorio a la condición relativa a la residencia, según está prevista en el proyecto de ley, mucho dependerá del sentido en que se interprete este requisito en la práctica. Entre la población no letona existe el temor de que muchos residentes permanentes no puedan cumplir esa condición debido, por ejemplo, a una estancia temporal en el extranjero para cursar estudios, entre otras razones. Otro motivo de inquietud es que un número apreciable de personas podrán quedar descalificadas porque han tenido su domicilio real en casas propiedad del Ministerio de Defensa del anterior Estado gobernante, o en alojamientos considerados "temporales", independientemente del período de residencia. Sobre la base de la información que figura en muchas de las peticiones individuales recibidas por el Jefe de la Misión, estos temores por desgracia parecen fundados.

9. En lo que atañe a los principios generalmente aceptados del derecho internacional en relación con el otorgamiento de la ciudadanía, no hay quebrantamiento por parte de Letonia por lo que se refiere a la manera en que se determinan los criterios para concederla. Sin embargo, teniendo en cuenta la situación concreta de la población no letona residente en el país, sería conveniente que Letonia, por motivos humanitarios, hiciera extensiva su nacionalidad a la mayoría de sus residentes permanentes que expresan el deseo de ser ciudadanos leales de Letonia.

b) Proceso de inscripción

10. El objetivo principal del actual proceso de inscripción es el de establecer quiénes son residentes en Letonia. Este proceso también servirá de base para determinar la situación jurídica y los derechos de la población actual y para aclarar asimismo qué personas tendrán derecho a la ciudadanía por naturalización, con arreglo a una ley sobre la materia que será promulgada en el futuro.

11. De las peticiones recibidas por el Jefe de la Misión, más de 300 se referían a supuestas prácticas arbitrarias y discriminatorias en la realización del proceso de inscripción. Un tema recurrente era que había personas a las que se les denagaba la inscripción en el registro y para ello se aducía que no tenían derecho a hacerlo, por diversos motivos, o que su período de residencia en Letonia quedaba reducido como consecuencia de la reglamentación aprobada por el Departamento de Ciudadanía e Inmigración.

12. Si se demuestra la veracidad de dichas denuncias, entonces la reglamentación del Departamento de Ciudadanía e Inmigración y, por lo visto, el abuso de autoridad de funcionarios del Departamento implican prácticas discriminatorias contra algunos grupos étnicos no letones de la población del país. Este es un motivo legítimo de preocupación que el Gobierno debe encarar con toda seriedad en aras de las relaciones armoniosas entre todos los grupos étnicos del país.

d) Ley sobre el idioma letón

13. La ley sobre el idioma letón no es incompatible en sí con el derecho internacional ni con las normas generalmente aceptadas sobre derechos humanos, aunque sus disposiciones provoquen un cierto grado de dificultad o incomodidad a la población que no habla letón. Además, las medidas afirmativas que las autoridades letonas han adoptado para promover el uso de esta lengua no violan las normas en cuestión y están en armonía con el principio del respeto a los idiomas de las minorías.

14. El uso generalizado del letón no parece plantear problema alguno, pero no se puede decir lo mismo acerca del requisito de someterse a exámenes sobre conocimientos lingüísticos, en especial cuando esa condición se aplica al otorgamiento de la ciudadanía por naturalización y al acceso a puestos de trabajo en el sector público y a la educación estatal. En este contexto, muchas personas que no hablan letón consideran que los exámenes sobre conocimientos del idioma son una forma de hostigamiento.

15. Según la información transmitida a la misión por personas de origen no letón, los cursos de lengua letona subvencionados por el Estado se impartían únicamente en empresas estatales grandes y los cursos privados eran muy caros. Además, se ha calificado de deficiente la metodología de los cursos de letón y se informa de que en algunos organismos públicos se ha dejado de administrar exámenes de competencia lingüística porque se consideraban muy complicados.

16. La propuesta de la misión sería que las autoridades de Letonia adoptaran las medidas apropiadas para cerciorarse de que los procedimientos de capacitación y examen se llevaran a cabo con flexibilidad, paciencia, objetividad, claridad y en las mejores condiciones técnicas posibles.

e) Propiedad

17. Según la información recibida, parece ser que los ciudadanos disfrutarán de un trato preferente porque recibirán un mayor número de certificados de privatización que los no ciudadanos. Muchas de las cartas recibidas por la misión reflejan la preocupación de la población no letona por su exclusión del proceso de privatización y por el hecho de que ni siquiera pueda comprar los apartamentos en los que está residiendo.

18. En estas circunstancias, cabe observar que en el artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos se enuncia el derecho a la propiedad. Sin embargo, en general se conviene en que el derecho a la propiedad está sujeto a restricciones razonables.

g) Libertad de circulación

19. Los residentes de Letonia, ciudadanos o no ciudadanos, tienen la misma libertad de circulación en el territorio. No se ha notificado ningún caso en que se haya negado la entrada al país a ciudadanos no letones que habían salido de él por algún tiempo.

20. Sin embargo, en el artículo 10 de la Ley Constitucional de 10 de diciembre de 1991 sobre los derechos y deberes de los ciudadanos y las personas, se estipula que "todo ciudadano tendrá derecho a entrar y salir libremente de Letonia" por lo que cabría suponer que los no ciudadanos no disfrutaran del derecho a regresar a Letonia. La denegación de regresar al país no sólo causaría sufrimientos injustos a las personas afectadas, sino que podría, por ejemplo, entrañar una violación del artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que se estipula la protección de la unidad familiar, si una persona fuera así separada de su familia.

Conclusiones y recomendaciones

21. Letonia atraviesa por un período de transición después del restablecimiento de la independencia. En ese período, el Gobierno de Letonia ha adoptado medidas para reparar ciertas injusticias y desigualdades históricas perpetradas durante el dominio soviético de 1940 a 1991.

22. Ello ha causado preocupación de los grupos étnicos no letones por su estatuto y papel futuros en ese país. La principal característica de la situación actual en Letonia es este sentimiento de inseguridad y no violación grave alguna de los derechos humanos.

23. La información recibida y examinada por la misión no revela que se hayan cometido violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos en Letonia. Las diversas violaciones que se han denunciado son muy pocas y no se relacionan con políticas de por sí discriminatorias, por lo que deberían y pueden ser reparadas en el nivel adecuado. Como aspecto positivo, cabe subrayar que no se han denunciado actos violentos, despidos masivos del trabajo, exclusión de las instituciones de enseñanza, desahucios de apartamentos o expulsiones.

24. Un elevado porcentaje de residentes del país carece todavía de la ciudadanía letona y teme que se le margine. Si bien los ciudadanos de la antigua Unión Soviética pueden conseguir la ciudadanía rusa previa solicitud, muchos de ellos no desean hacerlo ya que se proponen seguir viviendo en Letonia. Las normas y prácticas administrativas dudosas del registro de población que se está llevando a cabo constituyen un motivo de preocupación porque parecen discriminar contra algunas personas que no pertenecen a la población autóctona. Parece ser que, arbitrariamente, se ha prohibido que esas personas declaren su residencia en Letonia, con lo cual no reúnen las condiciones necesarias para naturalizarse, o que se les reconocen los años de residencia en menor grado de lo que sería justo y razonable, con lo cual ya no cumplen los años suficientes de residencia prevista para solicitar la naturalización. Habida cuenta del riesgo de que no se den oportunidades

económicas a los no ciudadanos, otro tema que merece consideración es la relación entre ciudadanía y derechos económicos.

25. Por el momento no se ha privado a nadie de su ciudadanía ni tampoco se ha privado de los derechos civiles a ningún segmento de la población. Por otra parte, existe un verdadero temor, bien fundado en algunos casos, de marginación mediante la denegación de la ciudadanía y los derechos fundamentales conexos. Eso crea una situación poco propicia a relaciones armoniosas entre los grupos étnicos y, en ese aspecto, origina un posible factor desestabilizador.

26. Tanto las autoridades como las minorías de Letonia están patentemente abiertas a las propuestas de las Naciones Unidas, lo cual es motivo de optimismo porque así se da la posibilidad de encontrar soluciones de avenencia. En esas circunstancias, las recomendaciones concretas siguientes podrían ayudar a lograr no sólo la reconciliación y la coexistencia, sino también una cooperación fructífera en una sociedad multicultural:

a) Debería adoptarse la ley de ciudadanía lo antes posible, a fin de que las personas pudieran regularizar su estatuto personal;

b) Antes de aprobarse, debería enmendarse la ley de ciudadanía de manera que el requisito de residencia fuese de 5 años y no de 16. Es conveniente que este requisito no se vea perjudicado por una estancia temporal en el extranjero o por un trabajo civil en las fuerzas armadas. Este período reducido de 5 años tendría un efecto psicológico muy positivo en las minorías no letonas y contribuiría con toda seguridad a consolidar la armonía entre los grupos étnicos;

c) Todas las normas y reglamentos que rigen el proceso de inscripción en el registro deberían hacerse públicas y difundirse ampliamente. En lo posible, deberían publicarse antes de ser aprobadas para que así hubiera oportunidad de celebrar consultas en audiencias públicas. Los criterios del registro deberían redactarse de manera clara y precisa a fin de evitar arbitrariedades a la hora de aplicarlos. Debería concederse atención especial a todos los casos y ejemplos de presuntas irregularidades cometidas en el proceso de inscripción en el registro, los cuales deberían examinarse individualmente;

d) Las autoridades de Letonia debería, en la práctica, garantizar a los no ciudadanos al menos los derechos enunciados en la Declaración sobre los derechos humanos de los individuos que no son nacionales del país en que viven;

e) En cuanto al requisito del idioma, para obtener la ciudadanía debería bastar con tener unos conocimientos básicos del letón. Los residentes de más de 50 años de edad deberían quedar exentos de los exámenes de idioma para naturalizarse. Ello no impediría que pudieran exigirse conocimientos superiores a la hora de solicitar determinados trabajos. Teniendo presente que el letón es el idioma oficial y que todos los documentos oficiales se escriben en letón, los residentes que no lo hablan verán que obra en su propio interés aprenderlo lo antes posible;

f) Con respecto a la privatización de tierra, casas y apartamentos, normalmente los derechos de propiedad de ciudadanos letones en 1940 y sus descendientes deberían ser prioritarios. Deberían preverse indemnizaciones por concepto de mejoras realizadas por ocupantes subsiguientes;

g) No debería excluirse a la población no letona del proceso de privatización. Por ejemplo, si hay personas que no reúnen de inmediato los requisitos necesarios para obtener el título de propiedad de los apartamentos que ocupan, debería concedérseles un período de gracia hasta que los reúnan. La Ley de Privatización debe contemplar el establecimiento de una Comisión de examen de casos determinados;

h) Deberían tomarse medidas preventivas para evitar cualquier aumento de tensión entre la población letona y los grupos étnicos no letones en el país. En particular, la Comisión Consultiva de Minorías Nacionales debería empezar a funcionar lo antes posible y asumir la responsabilidad de examinar las denuncias de discriminación. Además, la incitación a los prejuicios étnicos debería quedar prohibida por ley, como se pide en el párrafo 2 del artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

i) El Gobierno de Letonia, que ya se ha adherido al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, debería considerar su adhesión al Protocolo Facultativo a fin de que todas las personas bajo su jurisdicción, una vez agotados los recursos nacionales, pudieran presentar sus casos a título individual a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para su examen;

j) Las Naciones Unidas deberían estar preparadas para prestar servicios de asesoramiento y asistencia técnica en diversas esferas. Podría ser útil concertar un acuerdo sobre servicios de asesoramiento con el Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas;

l) Podría pedirse a la UNESCO, por conducto del PNUD, que prestara asistencia técnica para organizar la metodología de enseñanza y los criterios del examen de idioma letón para la parte de la población que no lo habla;

m) Podría pedirse al Centro de Derechos Humanos que proporcionara asistencia técnica para la difusión de documentos sobre derechos humanos, la capacitación de funcionarios que deben hacer frente a problemas relacionados con los derechos humanos, la redacción de leyes sobre derechos humanos y la vigilancia en las elecciones, y también que mantuviera contactos con el Consejo Consultivo de las Nacionalidades para examinar casos de presuntas discriminaciones;

n) Las Naciones Unidas deberían fomentar los contactos políticos entre las autoridades de Letonia y Rusia con objeto de buscar un arreglo pacífico de los problemas bilaterales económicos, militares y sociales, incluida la cuestión del retiro de las fuerzas militares rusas de Letonia.